

X. 3 Area de indemnizaciones a víctimas del terrorismo

1. Introducción

El volumen de **recursos destinados por el Ministerio del Interior** a resarcir a las víctimas del terrorismo ascendió a **19,57 millones de euros en 2003**, de los cuales **7,28** corresponden a los resarcimientos y ayudas del **régimen ordinario**, regulado por los artículos 94 a 97 de la **Ley 13/1996**, y **12,29 millones al régimen extraordinario de la Ley 32/1999 de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo**, norma por la cual el Estado ha asumido el pago de la responsabilidad civil fijada en las sentencias de condena por terrorismo.

Estas cifras no reflejan el total de aportaciones del Estado a las víctimas del terrorismo pues para ello habrían de tenerse en cuenta los pagos realizados por el Consorcio de Compensación de Seguros, y las pensiones extraordinarias por terrorismo de Clases Pasivas y la Seguridad Social, que no procede incluir en esta memoria, pero si apuntar la necesidad de tenerlas en cuenta para un cómputo total del sistema estatal de ayudas públicas a las víctimas.

El régimen indemnizatorio a víctimas del terrorismo a cargo del Ministerio del Interior empleó, **en conjunto, un volumen de recursos similar al del ejercicio anterior** (19,57 millones en 2003 frente a 20,86 millones de € en 2002), pues el descenso experimentado en el régimen ordinario (7,28 millones en 2003 frente a 12,79 millones de € en 2002) fue compensado por incremento de los resarcimientos del régimen extraordinario (12,29 millones en 2003 frente a 8,07 millones de € en 2002).

El régimen ordinario de indemnizaciones (Ley 13/1996) requirió un menor empleo de fondos pues los **7,27 millones de €** gastados contrastan con los 12,78 pagados en 2002 y se sitúan muy cerca de la media del quinquenio 1999-2003 (6,87 millones de €) como se observa en la tabla I. Esta retracción del gasto es paralela a una menor actividad terrorista atribuible a los éxitos policiales de prevención y represión en este campo. Especialmente significativo es el **descenso de atentados con daños materiales masivos** - en 2003 se produjo uno de cierta importancia en Alicante y otros menores en Benidorm y Santander- **y de muertes por terrorismo dentro del territorio nacional**.

La Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo (Ley 32/1999) continuó aplicándose por cuarto año consecutivo. Una vez alcanzado un cumplimiento total de la norma de 1999, la extensión del ámbito temporal de la misma a los daños causados por atentados producidos del año 2000 al 2003 dió lugar a la apertura de nuevos plazos para la presentación de solicitudes, las cuales se han ido resolviendo en la medida en que se provocaron los daños o se estabilizaron las lesiones derivadas de los mismos. En cuanto a pagos, **con los 12,29 millones de € abonados en 2003, el importe total de la ejecución de la Ley 32/1999 asciende a 260,19 millones de €** Como se explica en el epígrafe correspondiente, se ha detectado en el último ejercicio un **notable incremento de los pagos por sentencias sobrevenidas** a anteriores expedientes indemnizatorios en los que, en defecto de sentencia se aplicó el baremo de la Ley 32/99, o bien a un aumento de la

cuantía de responsabilidad civil en segundas o terceras resoluciones judiciales recaídas sobre los mismos hechos pero respecto a imputados que no pudieron ser juzgados en procesos anteriores. Esto ha obligado a **eleva las estimaciones de gasto para futuras anualidades a un total de 12-15 millones de euros.**

Desde el ángulo legal, se promovieron las modificaciones necesarias a través de la Ley 62/2003, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, para **ampliar el ámbito temporal de la Ley de Solidaridad a los hechos cometidos hasta 31 de diciembre de 2004.**

Por otro lado, se aprobó por el Real Decreto 288/2003, de 7 de marzo, un **nuevo Reglamento de Ayudas y Resarcimientos a las Víctimas del Terrorismo** que refunde y sistematiza las modificaciones introducidas a partir de la Ley 13/1996 y desarrolla las novedades legales introducidas por la Ley 24/2001, esto es: las nuevas prestaciones de prótesis e intervenciones quirúrgicas; las indemnizaciones por daños en locales de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales; las reparaciones de las viviendas no habituales en el 50% de los daños; el incremento hasta el cien por cien de los sufridos por los establecimientos mercantiles o industriales hasta la totalidad de los mismos con un límite de 90.152,82 euros; y las mejoras en los sistemas de evaluación de los daños y en el procedimiento de tramitación y revisión de los resarcimientos.

Desde el punto de vista de la gestión, ha tratado de mejorarse el mecanismo de respuesta ante las **emergencias** en atentados con grandes daños, extendiendo la red de **convenios** de colaboración con las corporaciones locales mediante la firma de los instrumentos adecuados para la reparación de inmuebles o realojamiento provisional de las víctimas.

La mejora en la calidad del servicio ha sido objeto de atención mediante el desarrollo de una **nueva aplicación informática** Asister, en software Oracle, destinada a la unificación y modernización de la gestión de las bases de datos existentes en materia de actos, afectados y procedimientos, la cual comenzó a ser operativa en el segundo semestre del año.

Durante 2003 ha continuado priorizándose como campo de mejora el intercambio de información, y en los casos que proceda, el impulso de una **actuación coordinada de los distintos centros o unidades competentes en materia de reconocimiento de ayudas o pensiones a las víctimas del terrorismo**, como son: INSS, Clases Pasivas, Unidades de Personal y Tribunales Médicos de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad, Médicos forenses de la Audiencia Nacional, Consorcio de Compensación de Seguros, y Oficinas de Víctimas de algunas Comunidades Autónomas.

2. Régimen ordinario de resarcimientos y ayudas a víctimas del terrorismo.

Se abonaron indemnizaciones en 2003 por valor de **7,28 millones** de €, cantidad inferior a la pagada en los dos años anteriores, pero ligeramente superior aún a la media del quinquenio 1999-2003 (6,78 millones de €) y todavía notablemente más alta que la **media del decenio 1994-2003 (6,87 millones de €)**. Para seguir la evolución de indemnizaciones a víctimas a lo largo de toda la **serie histórica** se puede consultar el **anexo 1**.

En la **tabla I** se puede observar la distribución de las indemnizaciones por terrorismo a lo largo del **quinquenio 1999-2003**, junto a la del resto de los conceptos indemnizatorios que integran la aplicación presupuestaria **16.01.221A.487** del Ministerio del Interior, con el que se comparte consignación presupuestaria y sistema de financiación mediante recursos del Fondo de Contingencia.

Tabla I Concepto 16.01.487

Ejecución del presupuesto del Estado en el quinquenio 1999-2003 (en miles de euros)

	Muertes	Lesiones	Daños materiales	Otros	TOTAL
1999		1.279,74	2.014,43	22,98	3.317,15
2000	1.876,37	713,25	150,38	119,74	2.859,74
2001	1.339,75	932,42	5.633,10	212,35	8.117,62
2002	470,71	2.182,27	10.062,75	69,90	12.785,63
2003	1.414,91	1.939,04	3.100,85	821,30	7.276,10
TOTAL	5.101,74	7.046,72	20.961,51	1.246,27	34.356,24
Media	1.020,35	1.409,34	4.192,30	249,25	6.871,24

2. 1. FALLECIMIENTOS

La **cantidad abonada** por fallecimientos fue **1.414.912 €**. De los 16 fallecimientos por terrorismo de 2003, trece han sido resarcidos dentro del ejercicio y los restantes lo serán en 2004. Asimismo, se resarcieron tres indemnizaciones, consecuencia de actos cometidos en los últimos meses del año 2002.

La **media** de indemnización **ordinaria** por muerte en atentado ha sido de **88.432€**, cantidad que individualmente varía en función de la situación familiar de la víctima. A esta cantidad, se añade después, dentro del **régimen extraordinario** de la Ley de Solidaridad de Víctimas con el Terrorismo, un mínimo de **138. 234 €** y, **además**, el importe de la **responsabilidad civil que fije la sentencia** de condena a los autores del delito, cuando esta se produzca y siempre que exceda de la suma de la

cifra percibida anteriormente de la Administración. La **pensión extraordinaria**, a la que tienen derecho la viuda e hijos del fallecido, completará el cuadro de ayudas recibidas. Esta pensión está **exenta del IRPF y del límite máximo** de las pensiones públicas y su cuantía es el doble del haber o base reguladora del causante. A título informativo diremos que en clases pasivas el **importe anual** de la pensión en 2003 puede oscilar entre **un rango de 30.512 €**, para números de la guardia civil o clase de tropa, **y 63.804 €** para oficiales o funcionarios del grupo A.

En la tabla II se recoge el número anual de fallecidos durante el último decenio, y en el anexo 2 de la Memoria su distribución temporal desde 1968.

Tabla II
Fallecimiento por Terrorismo
decenio 1993-2003

94	95	96	97	98	99	2000	2001	2002	2003*	TOTAL
12	15	6	13	6	0	26	16	5	16	115

* 13 en el extranjero

En 2003 se indemnizaron tanto dentro del **régimen ordinario** de la Ley 13/1996, como en el **extraordinario de la Ley 32/1999, los fallecimientos por terrorismo de españoles en el extranjero.**

Con carácter general, los españoles víctimas del terrorismo en el extranjero, por actos de organizaciones o grupos terroristas, cuya actividad no se desarrolle principalmente en España, pueden ser beneficiarios de ayudas excepcionales en virtud de una Ley promulgada en 2003, concretamente en aplicación de lo establecido en el artículo segundo de la Ley 2/2003, de 12 de marzo, que introduce un nuevo artículo, el 4 bis, a la Ley 32/1999.

2.2. LESIONES

Los **resarcimientos por lesiones** en 2003, **1.939.039 €** suponen una cifra superior a la media del quinquenio 1999-2003 (1,41 millones de €) puesto que, como también se observó en el 2002, han experimentado un significativo **incremento las indemnizaciones por incapacidad permanente**. Se indemnizó por lesiones en 2003 a 81 personas, de las cuales 26 fueron evaluadas con incapacidad permanente en los grados de absoluta (5) , total (19) y parcial (2). La **distribución** de los reconocimientos de **incapacidad por grados y grupos profesionales** se recoge en las **tablas III y IV**. En este último cuadro se contiene una **desagregación** de las incapacidades de **origen físico y psíquico**, donde se observa que en 2003 hay una **notoria desproporción a favor de estas últimas** pues triplican a las primeras.

A lo largo de 2003 se desestimaron 23 pretensiones de incapacidad permanente, en su totalidad de pretendido origen psicológico, y se encuentran en tramitación 11 solicitudes de invalidez que serán resueltas en 2004.

En los gastos arriba reseñados están incluidos los derivados de la asistencia psicológica de las víctimas, prótesis, pagos a cuenta e incapacidad temporal.

Tabla III
Distribución de Incapacidades Permanentes por Grados
1998-2003

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	TOTAL	Media
Gran Invalidez			1	1	1		3	0,5
Incapacidad Absoluta	2	6	2	4	7	5	26	4,3
Incapacidad Total	18	8	11	10	24	19	90	15
Incapacidad Parcial			1	1	1	2	5	0,8
TOTAL	20	14	15	16	33	26	124	20,6

El **coste de una incapacidad** en 2003, tomando como referencia el baremo legal correspondiente a una víctima con dos hijos y una situación familiar que justifique un incremento indemnizatorio del 20%, resultó de 48.730 € para una incapacidad parcial, 59.558 € para una total, 75.802 € para una absoluta y 97.459 € para una gran invalidez.

Tabla IV

INCAPACIDADES PERMANENTES RECONOCIDAS . 1998 – 2003

Distribución por tipo de lesión (física o psíquica) y grupo profesional

- No se incluyen incapacidades parciales.
- Las diferencias que se señalan con paréntesis se deben a la dificultad de clasificar en un apartado la patología causante de la incapacidad

	1998			1999			2000			2001			2002			2003		
	Fc.	Psic.	Subtotal	Fc.	Psic.	Subtotal	Fc.	Psic.	Subtotal	Fc.	Psic.	Subtotal	Fc.	Psic.	Subtotal	Fc.	Psic.	Subtotal
Guardia Civil	(2)	(2)	5	1	4	5	1	1	2	1	5	6	6	3	9	1	5	6
Policía Nacional	4	2	6	1	1	2	1	3	4	1	3	4	1	4	5		2	2
Policía Autonómica	1	1	2	-	-	-	-	3	3	1	1	2	1	2	3	1	6	7
Policía Local y Seguridad Privada	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	5
Instituciones Penitenciarias	-	1	1	2	-	2	-	1	1	-	2	2	-	4	4	-	-	-
Otros	(2)	(2)	6	4	-	4	-	1	4	-	1	1	(4)	(1)	9	3	3	6
TOTAL	(9)	(8)	20	8	6	14	5	9	14	(3)	(12)	15	(13)	(15)	32	6	20	26

En la tabla anterior se puede observar el peso más acusado de las lesiones invalidantes de etiología psíquica sobre las de origen físico, especialmente en algunos colectivos profesionales. En el ejercicio 2003, de 26 incapacidades reconocidas, 20 tuvieron un **origen psicológico**, lo que representa un **77% del total**, y de las psíquicas, 16, es decir **un 80% de las mismas, afectan a personas vinculadas con los cuerpos o servicios de seguridad**. Por lo demás, en el mismo período fueron desestimadas otras 23 pretensiones de incapacidad con un preponderante componente psicológico.

2.3 DAÑOS MATERIALES

La **cantidad pagada en 2003** por daños materiales, **3.100.849 €** es inferior a la **media del quinquenio 99-2003 (4,19 millones de €)**. La **disminución del gasto**, especialmente significativa respecto al bienio anterior, se explica por la **menor incidencia del número de atentados** y a la liquidación de deudas con el Ayuntamiento de Madrid operada en años precedentes respecto a reparaciones efectuadas por esta Corporación en aplicación del convenio suscrito con el Ministerio del Interior derivados de atentados cometidos varios años antes.

En el 2003 se hizo frente, principalmente, a las indemnizaciones derivadas de los atentados de **Alicante** y **Benidorm**, ambos cometidos el 22 de julio, y del producido en el **aeropuerto de Santander** cinco días después. En **Alicante**, donde los daños alcanzaron a inmuebles residenciales, se procedió a la **reparación directa** de los mismos mediante la adjudicación de las **obras de emergencia** a una empresa constructora. Asimismo se concluyó la liquidación de daños derivados de atentados del 2002 cometidos en Fuengirola, Marbella, Santander, Santa Pola, Villalba y Madrid (edificios Repsol y Torre Europa).

En todo caso, no existe una ajustada correlación temporal entre la actividad terrorista y los pagos por daños materiales. La explicación reside no solamente en el plazo de 12 meses habilitado para formalizar las reclamaciones por los afectados, y en el tiempo consumido por la práctica de las peritaciones oficiales del Consorcio de Compensación de Seguros, sino sobre todo a las posibles demoras de liquidación de las obras realizadas por convenio con las corporaciones locales, como antes se apuntó.

Sin embargo, en sentido opuesto, caso de no existir convenio, opera la necesidad de intervención directa de la Administración del Estado. Cada vez se detecta una mayor exigencia ciudadana para que la Administración proceda de forma inmediata a la reparación física de los daños causados por los atentados masivos y no se limite a compensar a los damnificados a posteriori de lo realizado por su cuenta.

Esta eventualidad de reparación física del daño por una Administración activa, en lugar de la mera compensación económica, es cada vez más frecuente desde que la comisión de atentados sucede fuera de Madrid, ciudad que antes tenía el cuasi-monopolio de estos atentados masivos y donde están vigentes dos convenios de colaboración con el Ayuntamiento en materia de obras y realojamiento de víctimas. Como ejemplos de actuaciones realizadas bajo la modalidad de una empresa interpuesta cabe citar Logroño en 2001, Santa Pola en 2002 y Alicante en 2003.

Aunque no se tienen cifras definitivas todavía, se puede adelantar que el número de damnificados materiales en el año 2003 es de cerca de 250. En la Tabla V se recoge la cifra de afectados por daños materiales en 2003 junto a los datos del resto del quinquenio, distinguiendo el tipo de bien afectado.

Tabla V

Quinquenio 1999-2003
 Damnificados por daños materiales en atentados terroristas

AÑO	VIVIENDAS	LOCALES	VEHÍCULOS	SIN DETERMINAR	OTROS	TOTAL
1998	19	5	7	9	0	40
1999	9	9	9	12	0	39
2000	572	80	84	62	7	805
2001	1.123	266	371	1	5	1.766
2002	818	89	139		3	1.049
2003	96	52	100	-	-	248
	2.637	501	710	84	15	3.947

2.4. OTRAS AYUDAS

En cuanto a otras clases de ayudas, su escala menor y carácter complementario permite englobarlas en las rúbricas antes descritas. Así la asistencia psicológica y las prótesis han quedado comprendidas, a efectos contables, dentro del gasto por lesiones y el alojamiento provisional dentro de los daños materiales. Sólo resta contemplar el gasto en becas de estudio, ayudas extraordinarias y subvenciones, conceptos de aparición reciente, por lo que se carece de series estadísticas de más alcance. Las ayudas extraordinarias supusieron 72.121 € de gasto ejecutado en 2000, 24.040 € en 2001, 46.575 € en 2002 y 304.660 € en 2003. Las subvenciones emplearon recursos por valor de 156.263 € en 2001, 2.048 € en 2002, y 493.636 € en 2003, año en el se ofertó una convocatoria para asociaciones de víctimas. Las becas consumieron 36.061 € en 2001, 21.279 € en 2002, y 23.673 € en 2003. En conjunto estos gastos ascendieron a 821.298 € en el ejercicio de 2003 como se observa en la tabla III.

2.5 PROCEDIMIENTOS

En 2003 se produjo un notable descenso de los expedientes indemnizatorios iniciados debido, lógicamente, a la comentada disminución de la actividad terrorista, consecuencia de los éxitos policiales en la prevención y represión de esta lacra. Así, frente al aumento observado en la tabla VI de los procedimientos tramitados en 2001 y 2002, derivado de la ofensiva de la organización terrorista ETA con atentados de coche-bomba en zonas urbanas densamente edificadas, en 2003 la ausencia de atentados con daños masivos condujo a una reducción al tercio de los procedimientos comenzados, sobre los del año 2002.

En cualquier caso, la carga del trabajo de gestión y el volumen de recursos utilizado en 2003 arrastra todavía las reparaciones de daños materiales producidos en ejercicios anteriores por las razones antes apuntadas (plazo de 1 año para las reclamaciones, demora de las peritaciones hasta poder valorar los proyectos de rehabilitación, presentación y aprobación de las certificaciones de obras realizadas por convenio etc.).

3. Régimen extraordinario de indemnizaciones de la Ley 32/1999, de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo.

3.1 ANTECEDENTES

La Ley de Solidaridad estableció, con carácter excepcional, un sistema indemnizatorio para el abono a las víctimas del terrorismo de la responsabilidad civil reconocida a su favor en las sentencias judiciales, debidamente actualizada a 31 de diciembre de 1999, o la cantidad fijada en el baremo legal para aquellas no titulares de resolución judicial. Para la ejecución de la Ley se previó un crédito extraordinario de 280,22 millones de euros (46.624 millones de pesetas) y se reforzó la capacidad de gestión del Área de indemnizaciones de la Subdirección General encargada de la Asistencia a las Víctimas del Terrorismo para poder asimilar la carga de trabajo.

A partir de la publicación del Reglamento de la Ley, el 22 de diciembre de 1999, se abrió un plazo de 6 meses para la presentación de solicitudes y, paralelamente, se inició la instrucción de los expedientes el 1 de febrero de 2000, una vez dotados los medios personales, informáticos y los espacios de oficina para esta tarea. El período de aplicación de la Ley abarcaba 18 meses (12 meses de plazo de tramitación más los 6 iniciales), con un horizonte final calculado para el grueso de la operación (salvo revisiones por sentencias sobrevenidas) hasta el 23 de junio de 2001. Posteriormente, las Leyes de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 14/2000, 24/2001, 53/2002 y 62/2003 han ido ampliado el ámbito temporal de la Ley de Solidaridad hasta 31 de diciembre de 2004. Consiguientemente el período de ejecución se ha extendido en el tiempo, lo que se presume que seguirá sucediendo en el futuro mientras persista la lacra del terrorismo.

3. 2. EJERCICIO 2003.

Como se recoge en los datos agregados de la tabla VII, al finalizar el año 2003 las solicitudes registradas ascendían a 5.967, agrupadas en 3.315 expedientes. El número de expedientes evaluados por la Comisión Interministerial creada por la Ley de Solidaridad fue de 3.264 (el 81% en sentido estimatorio), que representa un porcentaje de ejecución de la Ley 32/1999 del 98.5%, y un volumen de gasto evaluado de 261,55 millones de euros. **El pago agregado hasta 31 de diciembre de 2003 ascendió a 260,19 millones de euros.**

Tabla VII

Ejecución de la Ley 32/1999
 Datos acumulados a 31 de diciembre de cada ejercicio 2000-2003

AÑOS	Solicitudes presentadas (a)	Expedientes abiertos (b)	Expedientes Evaluados por Comisión (c)	c/b x 100	Coste evaluado	Coste pagado
2000	5.053	2.852	2.295	80	223,53	208,65
2001	5.527	3.065	2.967	97	242,36	239,82
2002	5.636	3.174	3.120	98	248,74	247,90
2003	5.967	3.315	3.264	99	261,50	260,20

*coste en millones de euros

La totalidad de las solicitudes presentadas al amparo de la Ley 32/1999, es decir las correspondientes a resarcimientos por delitos de terrorismo sufridos desde 1968 a 1999, han sido resueltas en vía administrativa. Los procedimientos actualmente en curso, en número de 51, se derivan bien de hechos terroristas cometidos con posterioridad a la promulgación de la Ley 32/99, esto es al 8 de octubre de 1999, o bien de sentencias sobrevenidas que fijan cantidades superiores a las indemnizaciones acordadas en vía administrativa. Como se dijo antes, el ámbito temporal de la Ley ha sido prolongado paulatinamente, hasta el 31 de diciembre de 2004, por las sucesivas leyes de acompañamiento. (D.A. 9ª de la Ley 14/2000, aº. 44 de la Ley 24/2001, aº. 48 de la Ley 53/2002, y aº. 49 de la Ley 62/2003).

Los 51 procedimientos pendientes de resolver a finales de 2003 se encuentran en su mayoría a la espera de que se estabilicen las lesiones de los heridos y se efectúen las evaluaciones médicas, o de que ganen firmeza las resoluciones judiciales que proceda ejecutar.

Desde el punto de vista económico, el importe de los expedientes evaluados por la Comisión alcanza la suma de 261,55 millones de € (43.518 millones de pesetas). Esta cifra contiene 23,31 millones de € (3.878 millones de pesetas) que corresponden a expedientes del período de ampliación y de sentencias sobrevenidas, por lo que el coste del periodo inicial de la Ley 32/1999 -es decir de las solicitudes presentadas hasta el 23 de junio de 2000- se puede cuantificar en 238,24 millones de € (39.640 millones de pesetas).

La extensión del ámbito temporal de la Ley 32/1999 por cinco años ha aumentado la necesidad de cobertura financiera, la cual fue valorada en los primeros informes, aproximadamente, en 6 millones de euros anuales. Esta previsión debe ser actualizada a la vista de la ejecución presupuestaria del último bienio, observable en el cuadro de pagos siguiente.

Tabla VIII

Pagos Ley 32/99 (en millones)		
Año 2000	208,652 €	34.717 ptas
Año 2001	31,170 €	5.186 ptas
Año 2002	8,074 €	1.343 ptas
Año 2003	12,291 €	2.045 ptas

Vemos cómo durante el **ejercicio de 2003** el **gasto realizado supera los 12 millones de €** lo cual es atribuible en buena parte al notable incremento de la cuantía de la responsabilidad civil fijada en sentencias penales sobrevenidas a hechos ya anteriormente indemnizados por la Administración, y que es asumida subsidiariamente por el Estado.

Tabla IX

Pagos por sentencias sobrevenidas (en millones)		
AÑO	EUROS	PESETAS
2001	0,739	123
2002	2,151	356
2003	9,189	1.529

En muchos casos se trata de segundas o terceras sentencias recaídas en juicios por los mismos hechos respecto a distintos autores, a raíz de las recientes detenciones o extradiciones, y que comportan un incremento de la valoración de los daños resarcibles.

ANEXO I									
RESARCIMIENTOS POR TERRORISMO PERÍODO 1975-2003									
PERÍODO	RÉGIMEN ORDINARIO INDEMNIZACIONES						RÉGIMEN	GASTO TOTAL	
	MUERTES	LESIONES	DAÑOS	OTROS	EUROS	EUROS	EXTRAORDINARIO		TOTAL EUROS
			MATERIALES		CORRIENTES	CONSTANTES	LEY	TOTAL EUROS	
							SOLIDARIDAD	CORRIENTES	CONSTANTES
1975-78	1.806.167,84				1.806.167,84	11.504.737,07		1.806.167,84	11.504.737,07
1979	124.109,00				124.109,00	570.589,34		124.109,00	570.589,34
1980	376.534,08	99.768,01			476.302,09	1.895.033,18		476.302,09	1.895.033,18
1981	673.434,06	100.669,53			774.103,59	2.689.047,83		774.103,59	2.689.047,83
1982	261.740,77	97.300,25			359.041,03	1.090.091,05		359.041,03	1.090.091,05
1983	412.174,10	113.809,57			525.983,67	1.423.706,14		525.983,67	1.423.706,14
1984	851.634,15	220.831,40			1.072.465,56	2.608.328,27		1.072.465,56	2.608.328,27
1985	773.388,45	149.457,65			922.846,10	2.062.487,66		922.846,10	2.062.487,66
1986	1.655.963,99	410.355,10			2.066.319,09	4.245.976,61		2.066.319,09	4.245.976,61
1987	2.576.492,26	1.046.613,10			3.623.105,36	7.073.311,91		3.623.105,36	7.073.311,91
1988	1.288.357,63	1.030.234,02			2.318.591,65	4.317.782,91		2.318.591,65	4.317.782,91
1989	1.357.321,04	1.008.457,83			2.365.778,87	4.125.248,00		2.365.778,87	4.125.248,00
1990	882.392,03	888.335,31			1.770.727,34	2.891.893,97		1.770.727,34	2.891.893,97
1991	2.154.177,98	943.156,18			3.097.334,16	4.776.066,24		3.097.334,16	4.776.066,24
1992	2.282.472,76	928.629,25	887,77		3.211.989,78	4.674.654,68		3.211.989,78	4.674.654,68
1993	1.220.167,38	1.319.568,73	36.885,31		2.576.621,42	3.588.445,06		2.576.621,42	3.588.445,06
1994	714.514,80	1.370.628,84	127.059,51		2.212.203,15	2.942.255,24		2.212.203,15	2.942.255,24
1995	711.687,86	1.342.522,65	296.283,88		2.350.494,39	2.984.206,64		2.350.494,39	2.984.206,64
1996	1.334.812,36	717.038,99	55.653,81		2.107.505,17	2.584.433,73		2.107.505,17	2.584.433,73
1997	1.116.405,83	1.361.581,56	659.706,83		3.137.694,22	3.772.659,07		3.137.694,22	3.772.659,07
1998	609.916,16	1.388.706,48	1.641.168,79	501.851,12	4.141.642,55	4.890.090,00		4.141.642,55	4.890.090,00
1999		1.279.743,50	2.014.430,85	22.982,56	3.317.156,91	3.780.510,93		3.317.156,91	3.780.510,93
2000	1.876.366,79	713.247,53	150.378,90	119.739,65	2.859.732,87	3.133.838,49	208.652.425,46	211.512.158,33	231.785.615,63
2001	1.339.753,34	932.424,37	5.633.103,16	212.347,75	8.117.628,63	8.661.834,44	31.169.833,78	39.287.462,42	41.921.293,88
2002	470.710,55	2.182.268,91	10.062.752,26	69.902,15	12.785.633,87	13.118.060,35	8.073.789,86	20.859.423,73	21.401.768,75
2003	1.414.912,20	1.939.038,70	3.100.848,62	821.297,59	7.276.097,11	7.276.097,11	12.291.087,75	19.567.184,86	19.567.184,86
TOTAL	28.285.607,41	21.584.387,46	23.779.159,69	1.748.120,82	75.397.275,38	112.681.385,94	260.187.136,85	335.584.412,23	395.167.418,66
(*) Cantidad abonada con cargo a la suscripción popular promovida por ABC y el Ministerio. La actualización se calcula sobre pesetas corrientes del año 1977.									
**) Los resarcimientos se financian, a partir de 1979, por los Presupuestos del Estado.									
(***) En 1.983 y 1.984 se resarcen retroactivamente las lesiones producidas de 1976 a 1979 pues hasta entonces sólo se indemnizaba por fallecimiento.									
Hasta 1999 la actualización monetaria se basa en las medias anuales del índice general de precios al consumo, y a partir del 2000 en la variación del IPC a 31 de diciembre de cada año.									

ANEXO II																		
FALLECIMIENTO POR TERRORISMO 1968 – 2003																		
	AÑO DEL ATENTADO																	
	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
TOTAL	2	1		1	2	9	19	31	20	29	91	119	122	43	44	48	48	70

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003*	TOTAL
TOTAL	47	55	24	28	29	46	26	15	12	15	6	13	6		26	16	5	16	1084

* 13 EN EL EXTRANJERO